

**Acuerdo de 19 de agosto de 2021, del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, sobre la adopción de medidas provisionales, en relación con el expediente de contratación “Gestión de la residencia de personas mayores afectadas de la enfermedad de alzheimer de Getafe (Madrid)”, número de expediente 098/2020(A/SER-028417/2020)**

Con fecha 12 de agosto se ha recibido en este Tribunal escrito de la representación legal de la empresa Ferrovial Servicios, S.A., formulando recurso especial en materia de contratación contra la Orden de 26 de julio de 2021 de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social por la que se acuerda su exclusión del procedimiento de licitación por no quedar debidamente justificada su oferta incurso en valores anormales o desproporcionados y se acepta la propuesta de adjudicación del citado contrato.

La recurrente en el escrito de interposición del recurso solicita la medida cautelar de suspensión temporal del procedimiento de licitación hasta que se resuelva el recurso manifestando que las alegaciones formuladas evidencian que el acuerdo de exclusión no se ajusta a derecho por lo que reflejan la apariencia de buen derecho “fumus boni iuris” y que con la suspensión del procedimiento se podría garantizar la corrección de las infracciones producidas en un momento en el que esa corrección aún pueda tener un efecto útil.

El artículo 51.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transpone al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP) establece que en el escrito de interposición se hará constar el acto recurrido, el motivo que fundamenta el recurso, los medios de prueba de que pretende valerse el recurrente y en su caso las medidas de naturaleza cautelar cuya adopción solicite.



Recibida por el órgano de contratación, el 13 de agosto de 2021, la solicitud de este Tribunal de remisión del expediente y del preceptivo informe, establecido en el artículo 56.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, ha tenido entrada el referido expediente, en este Tribunal, el 17 de agosto de 2021. En el informe del órgano de contratación sobre la medida cautelar de suspensión del procedimiento solicitada indica que *“el día 2 de agosto de 2021 se requirió a SACYR SOCIAL, S.L. la documentación como propuesta adjudicataria, en base al artículo 150.2 de la LCSP. Esta documentación se presentó por SACYR SOCIAL, S.L el día 13 de agosto de 2021. En aras a compatibilizar, de un lado la tramitación del expediente generando el mínimo de interferencias y por otro, garantizar que no se adopta ningún acuerdo del órgano de contratación que pueda perjudicar a la recurrente, se solicita al Tribunal la continuación del procedimiento hasta el momento inmediatamente anterior a la adjudicación del contrato, pudiéndose examinar por la mesa de contratación la documentación de SACYR SOCIAL, S.L.”*.

La suspensión automática del expediente de contratación en fase de adjudicación, tiene por objeto evitar que con la formalización del contrato se puedan consolidar situaciones de ilegalidad e impedir que se causen otros perjuicios a los interesados afectados, tal y como aparece configurada ya en el artículo 2.3 de la Directiva 89/665/CE (redacción actual dada por la Directiva 2007/66/CE), que dispone la suspensión del procedimiento como garantía de que el poder adjudicador no pueda celebrar el contrato cuando el recurso se plantee contra la decisión de adjudicación de un contrato *“Cuando se someta a un órgano de primera instancia independiente del poder adjudicador un recurso referente a una decisión de adjudicación de un contrato, los Estados miembros garantizarán que el poder adjudicador no pueda celebrar el contrato hasta que el órgano que examine el recurso haya tomado una decisión sobre la solicitud de medidas provisionales o sobre el fondo del recurso”*.

Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la adopción de la medida cautelar exige que el recurso pueda perder su finalidad legítima, lo que significa que, de ejecutarse el acto, se crearían situaciones jurídicas irreversibles haciendo ineficaz la sentencia (en este caso resolución) que se dicte, e imposibilitando el cumplimiento



de la misma en sus propios términos, con merma del principio de identidad. Aun concurriendo el anterior presupuesto, puede denegarse la medida cautelar siempre que se aprecie perturbación grave de los intereses generales o de tercero, lo que obliga a efectuar siempre a un juicio comparativo de todos los intereses en juego, concediendo especial relevancia, a la hora de decidir, a la mayor perturbación que la medida cause al interés general o al de un tercero afectado por la eficacia del acto impugnado; y, en todo caso, el juicio de ponderación que al efecto ha de realizar el órgano jurisdiccional debe atender a las circunstancias particulares de cada situación, y exige motivación acorde con el proceso lógico efectuado para justificar la adopción o no de la medida cautelar solicitada.

Por otro lado, el recurso especial en materia de contratación tiene como finalidad obtener una resolución rápida y eficaz, de manera que una decisión ilegal no se pueda consolidar por la perfección del contrato.

Esta misma argumentación relativa a la fase de adjudicación, nos sirve también para justificar la adopción de medidas cautelares en supuestos en que, como en el presente, no se impugna la resolución de adjudicación, sino algún otro de los actos objeto del recurso, cuando el estado de la tramitación del expediente coloca al mismo en una situación similar.

Por ello, considerando que el procedimiento de contratación se encuentra muy avanzado de tal forma que podría llegarse a adjudicar el contrato, este Tribunal considera conveniente la suspensión del procedimiento de licitación hasta que se haya decidido sobre el fondo del asunto.

El recurso especial en materia de contratación tiene como finalidad obtener una resolución rápida y eficaz, de manera que una decisión ilegal no se pueda consolidar, y con la suspensión de la tramitación del expediente de contratación en este supuesto se trata de evitar la posibilidad de causar perjuicios a los interesados afectados y, que, en su caso, se facilite la retroacción de las actuaciones al momento en que se cometió la posible infracción.



De acuerdo con lo anterior, ponderadas las circunstancias del caso y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.3 de la LCSP, este Tribunal por unanimidad.

### **ACUERDA**

Suspender la tramitación del procedimiento de adjudicación del contrato “Gestión de la residencia de personas mayores afectadas de la enfermedad de alzheimer de Getafe (Madrid)” de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, número de expediente 098/2020(A/SER-028417/2020), hasta que se resuelva el recurso y se acuerde expresamente el levantamiento de la suspensión.

Contra el presente Acuerdo no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de los que procedan contra la resolución que se dicte en el procedimiento principal.

**EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL**



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv) mediante el siguiente código seguro de verificación: **0907367596008376660789**